

<p>ROL Liderazgo estratégico y enfoque hacia la prevención PROCESO Evaluación Independiente</p>		
NOMNRE PROFESIONAL OFICINA DE CONTROL INTERNO	CAMILO OLIVELLA VALENCIA	FECHA 04/05/2026
CARGO O CONTRATO	CONTRATO 780-2026	
TIPO DE ACCIÓN	PARTICIPANTES	TEMA Y DESCRIPCION DE LA ASESORIA O ACOMPANAMIENTO
ACOMPANAMIENTO COMITÉ DE CONCILIACIÓN (06-05-2025)	<p>PERMANENTES:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Delegada Secretario Distrital de Gobierno ✓ Subsecretaría de Gestión Institucional ✓ Directora Jurídica ✓ Subsecretario de Gestión Local ✓ Directora Gestión de Talento Humano <p>INVITADOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Jefe Oficina Control Interno ✓ Delegada Secretaría Jurídica Distrital ✓ Secretaria Técnica del comité ✓ Apoderado(s) Secretaría Jurídica Distrital 	<p>Teniendo en cuenta la información registrada en las Fichas SIPROJ No. 1838, 1839,1840,1841,374,184.</p> <p>Se realiza su revisión y análisis así:</p> <p><u>FICHA TECNICA DE CONCILIACIÓN: 1838</u></p> <p>Responsable de la ficha: DANIEL ORJUELA SANCHEZ Numero de proceso: E- 2026-143607 Tipo de proceso: CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL Demandante: 1. URUEÑA URUEÑA ANA MARIA CÉDULA 2. URUEÑA CUERVO DIANA JOHANNA 3. CUERVO MARIA DEL CARMEN 4. URUEÑA CUERVO SANDRA MILENA 5. URUEÑA CUERVO YESID 6. URUEÑA YESID 7. URUEÑA CUERVO YONATAN</p> <p>Demandado: 1. 1. SECRETARÍA DE GOBIERNO. 2.. INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO 3. SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD 4.UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL 5. SECRETARÍA DE GOBIERNO ALC.LOCAL-KENNEDY</p> <p>Despacho: PROCURADURÍA 9 - JUDICIAL ADMINISTRATIVA</p> <p>PROBLEMA JURIDICO:</p> <p>¿ El Fondo de Desarrollo Local de Kennedy es administrativamente responsable por las lesiones sufridas por YEZID URUEÑA y MARIA DEL CARMEN CUERVO, debido al accidente de tránsito que tuvo lugar el día 21 de mayo de 2024, en la CARRERA 90 con CALLE 6A de la Localidad de Kennedy?</p> <p>PRETENSIONES DE LA DEMANDA:</p>

	<p>Se solicita declarar la responsabilidad administrativa del Distrito Capital de Bogotá y varias entidades (Alcaldía Local de Kennedy, IDU, UAERMV y Secretaría de Movilidad) por los daños ocasionados a YEZID URUEÑA y MARÍA DEL CARMEN CUERVO en un accidente de tránsito ocurrido el 21 de mayo de 2024, atribuido a la falta de señalización de un objeto en la vía. En consecuencia, se pretende el reconocimiento y pago de perjuicios materiales e inmateriales (daño moral y a la salud) tanto para los lesionados como para sus familiares, por un total de \$192.599.550 por perjuicios inmateriales, así como el pago de intereses, costas procesales y el cumplimiento de la sentencia conforme a la ley.</p> <p>DESCRIPCIÓN CLARA DE LOS PERJUICIOS:</p> <p>El convocante estima los perjuicios en la suma de CIENTO NOVENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS (\$192.599.550)</p> <p>RELACIÓN CLARA DE LOS HECHOS:</p> <p>El 21 de mayo de 2024, YEZID URUEÑA y MARÍA DEL CARMEN CUERVO sufrieron un accidente de tránsito mientras se movilizaban en motocicleta en la localidad de Kennedy, al colisionar con un maletín ubicado en la vía, lo que les ocasionó lesiones. Aunque la parte convocante afirma que en el lugar se realizaban obras de mantenimiento vial, el informe policial indicó que la malla vial estaba en buen estado y no evidenció obras ni características del objeto, ni aportó registro fotográfico. Asimismo, la Alcaldía Local de Kennedy señaló que, si bien existían contratos de mantenimiento vial vigentes, el tramo donde ocurrió el accidente no hacía parte de las zonas intervenidas.</p> <p>ANÁLISIS Y CONCEPTO PARA CONCILIAR:</p> <p>Se analiza si el Fondo de Desarrollo Local de Kennedy debe indemnizar por el accidente ocurrido el 21 de mayo de 2024, concluyéndose que no ha operado la caducidad de la acción. Sin embargo, tras valorar las pruebas, se determina que no está acreditada una falla en el servicio ni un nexo causal entre el daño y la actuación de la entidad, ya que no se probó que en el lugar se ejecutaran obras ni que el objeto con el que colisionaron las víctimas perteneciera a estas; además, el informe policial señala que la vía estaba en buen estado y no evidencia intervención alguna. En consecuencia, no surge responsabilidad ni obligación de indemnizar por parte del Fondo de Desarrollo Local de Kennedy.</p>
--	--

		<p>RECOMENDACIÓN:</p> <p>Frente a la postura de no presentar formula conciliatoria no se realiza ninguna observación.</p> <p><u>FICHA TECNICA DE CONCILIACIÓN: 1839</u></p> <p>Responsable de la ficha: LILIANA MAYORGA LLANOS Numero de proceso: E- 2026-175794 Tipo de proceso: CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL Demandante: VASQUEZ GONZÁLEZ OLGA LILIANA</p> <p>Demandado: SECRETARÍA DE GOBIERNO (SOLO REPRESENTA)</p> <p>Despacho: PROCURADURIA 12 - JUDICIAL ADMINISTRATIVA - II</p> <p>PROBLEMA JURIDICO:</p> <p>Determinar si a través del mecanismo extrajudicial de la conciliación es dable a la Secretaría Distrital de Gobierno - Inspección de Policía 4A de San Cristóbal, dejar sin efectos la decisión proferida el 29 de julio de 2021, dentro del expediente policivo 2018843890100264E, mediante la cual se impuso una multa por infracción urbanística y se ordenó la demolición de obras que ocupan el antejardín del inmueble ubicado en la Carrera 7 B 1 57 Sur y como consecuencia de ello se exonere el pago de la multa urbanística impuesta en la orden de policía y la demolición.</p> <p>PRETENSIONES DE LA DEMANDA:</p> <p>Se solicita la nulidad del acta de audiencia pública del 29 de julio de 2021, mediante la cual la Inspección 4D de Policía de San Cristóbal impuso multa y orden de demolición a OLGA LILIANA VASQUEZ GONZÁLEZ, así como el restablecimiento de sus derechos, exonerándola de dichas sanciones y reconociendo perjuicios materiales y morales. La solicitud se fundamenta en múltiples irregularidades que vulneraron el debido proceso, como indebidas citaciones y notificaciones, falta de notificación de actos clave, errores en la tasación de la multa, incongruencias en el acto administrativo, deficiencias en los informes técnicos e incompetencia de la autoridad. En consecuencia, se propone como fórmula conciliatoria la revocatoria directa del acto administrativo por parte de la misma Inspección, evitando así el inicio de un proceso judicial.</p> <p>DESCRIPCIÓN CLARA DE LOS PERJUICIOS:</p>
--	--	---

		<p>Estima por perjuicios morales y materiales y gastos de defensa el valor que asciende a TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE (\$300.000.000,00), sin perjuicio de los intereses e indexación solicitados y que se lleguen a causar en una eventual demanda</p> <p>RELACIÓN CLARA DE LOS HECHOS:</p> <p>El 6 de agosto de 2025, OLGA LILIANA VÁSQUEZ GONZÁLEZ conoció la existencia de una sanción de multa y demolición sobre su inmueble al intentar tramitar un crédito hipotecario, tras evidenciarse un embargo en el certificado de tradición. La actuación administrativa se originó en 2018 por una queja anónima por presunta construcción sin licencia; sin embargo, aunque la propietaria contaba con licencia de construcción vigente desde 2019, la Inspección de Policía adelantó el proceso con múltiples irregularidades, como visitas técnicas incompletas (sin ingreso al predio ni verificación documental), falta de notificación personal, citaciones sin soporte y notificación por aviso indebida, lo que le impidió ejercer su defensa. En consecuencia, en 2021 se impuso multa y orden de demolición sin su comparecencia, decisión que derivó en cobro coactivo, embargo de bienes, incremento de la deuda y gestiones para ejecutar la demolición, pese a no haberse garantizado el debido proceso.</p> <p>ANÁLISIS Y CONCEPTO PARA CONCILIAR:</p> <p>De acuerdo con los artículos 89 y 90 de la Ley 2220 de 2022, solo son conciliables los asuntos que no tengan la acción caducada. En este caso, la decisión sancionatoria fue adoptada en audiencia del 29 de julio de 2021 y quedó ejecutoriada en esa misma fecha, considerando además el término de tres días previsto por la Corte Constitucional para justificar la inasistencia. Así, conforme al artículo 164 del CPACA, el término de caducidad de cuatro meses vencía el 29 de noviembre de 2021. Dado que la solicitud de conciliación fue presentada el 6 de abril de 2026, cuando ya había operado la caducidad, el asunto no es susceptible de conciliación.</p> <p>CADUCIDAD DE LA ACCIÓN:</p> <p>Conforme a lo indicado en el acápite anterior, en el presente asunto se está frente a una caducidad habida cuenta que la convocatoria a conciliar fue presentada fue del plazo indicado en el artículo 164 del CPACA, esto, teniendo como punto de partida el término de ejecutoria de la decisión que sustenta la pretensión.</p> <p>PONDERACIÓN DE LA SITUACIÓN PROCESA:</p>
--	--	---

	<p>Del análisis integral del caso, incluyendo el pronunciamiento del Inspector de Policía y la revisión del expediente, se concluye que la actuación policiva se adelantó conforme a lo dispuesto en la Ley 1801 de 2016, evidenciándose que la convocante fue citada en varias oportunidades mediante distintos mecanismos (citaciones y avisos), incluso con constancias de envío y recepción, y que tuvo conocimiento previo del proceso, participando inicialmente en la audiencia de 2019. Asimismo, la decisión sancionatoria fue adoptada en audiencia del 29 de julio de 2021, sin que se interpusieran los recursos procedentes en esa oportunidad, configurándose su ejecutoria. En consecuencia, al haber operado la caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho (noviembre de 2021) y presentarse la solicitud de conciliación en abril de 2026, el asunto no es conciliable. Adicionalmente, no se evidencian vulneraciones al debido proceso ni irregularidades sustanciales que desvirtúen la legalidad de la actuación administrativa, por lo que no resulta procedente plantear fórmula conciliatoria ni el llamamiento en garantía.</p> <p>ANTECEDENTES DOCTRINALES Y JURISPRUDENCIALES:</p> <p>La jurisprudencia constitucional ha establecido que las nulidades en procesos policivos deben alegarse oportunamente, pues de lo contrario se entienden saneadas; así, la Sentencia T-238 de 1996 señala que cuando la parte actúa dentro del proceso sin invocar la nulidad, esta se convalida, criterio reiterado en la Sentencia C-443 de 2019 al indicar que la nulidad se sana cuando no se alega en tiempo, se convalida expresamente o no afecta el derecho de defensa. En igual sentido, el Consejo de Estado ha precisado que la nulidad por infracción normativa se configura por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea de la norma. No obstante, tratándose de comportamientos urbanísticos como los previstos en el artículo 138 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, estos son de carácter permanente, lo que implica que sus efectos se prolongan en el tiempo, incidiendo en el análisis de legalidad pero sin desvirtuar la necesidad de alegar oportunamente las irregularidades procesales.</p> <p>RECOMENDACIÓN:</p> <p>Frente a la postura de no presentar formula conciliatoria no se realiza ninguna observación.</p> <p><u>FICHA TECNICA DE CONCILIACIÓN: 1840</u></p>
--	--

		<p>Responsable de la ficha: CRISTIAN HUMBERTO CUERVO REYES</p> <p>Numero de proceso: E- 2026-159499</p> <p>Tipo de proceso: CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL</p> <p>Demandante: GAMEZ PARRA CINTYA ALEXANDRA</p> <p>Demandado: SECRETARÍA DE GOBIERNO</p> <p>Despacho: PROCURADURÍA 44 - JUDICIAL II PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS</p> <p>PROBLEMA JURIDICO:</p> <p>¿Establecer si la Resolución 0801 del 20 de noviembre de 2025, expedida por la Secretaría Distrital de Gobierno, adolece de alguna de las causales de nulidad establecidas en el artículo 137 del CPACA y que fueron invocadas por la parte convocante, en virtud a la existencia de una presunta estabilidad laboral reforzada que le asiste dado el nacimiento de su hijo en el marco de la relación laboral que existió entre las partes en provisionalidad?</p> <p>PRETENSIONES DE LA DEMANDA:</p> <p>Como pretensiones la parte convocante solicita lo siguiente: - Declarar la nulidad de la Resolución DPS No. 0801 de 2025, por incurrir en causales legales de nulidad. - A título de restablecimiento del derecho, mediante la adopción de medidas que disponga la protección del debido proceso, la estabilidad laboral reforzada y el acceso a la justicia. - Así mismo, reclama una indemnización económica de \$104.615.950, argumentando un despido irregular, equivalente a un despido injustificado, esto, dando aplicación al artículo 65 del CST - Que el pago sea actualizado, incluyendo intereses e indexación. - Y que se tomen medidas de no repetición, orientadas a evitar futuras vulneraciones de derechos fundamentales y laborales en situaciones similares.</p> <p>DESCRIPCIÓN CLARA DE LOS PERJUICIOS:</p> <p>Pago de la indemnización por el presunto despido sin justa causa por valor de \$104.615.950, con la sanción moratoria establecida en el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo.</p> <p>RELACIÓN CLARA DE LOS HECHOS:</p> <p>Como hechos relevantes, se tiene que la convocante fue vinculada en provisionalidad a la Secretaría Distrital de Gobierno en diciembre de 2022 y posteriormente accedió a teletrabajo por su condición familiar.</p>
--	--	--

	<p>En septiembre de 2023 informó un embarazo de alto riesgo y en marzo de 2024 nació su hijo prematuro, situación que reforzó su protección constitucional; en abril de 2025 notificó su condición de madre lactante. No obstante, fue desvinculada el 15 de mayo de 2025 tras el nombramiento en periodo de prueba de otro funcionario, sin que —según afirma— se considerara su estabilidad laboral reforzada ni se evaluara su reubicación. Ante ello, interpuso acción de tutela, que inicialmente amparó su derecho de petición y luego fue modificada por el superior, ordenando a la entidad emitir un acto administrativo motivado sobre su situación laboral. En cumplimiento, la entidad expidió la Resolución 0801 de noviembre de 2025, la cual fue notificada a la convocante, quien manifestó inconformidad y promovió incidente de desacato.</p> <p>ANÁLISIS Y CONCEPTO PARA CONCILIAR:</p> <p>En virtud del artículo 89 de la Ley 2220 de 2022, son conciliables los conflictos sometidos a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo cuando no exista prohibición legal expresa. En el presente caso, la convocante fundamenta sus pretensiones en un presunto despido injustificado y el reconocimiento de la indemnización derivada, con base en los artículos 64 y 65 del Código Sustantivo del Trabajo. Sin embargo, dichas pretensiones recaen sobre derechos inciertos y discutibles, en la medida en que la desvinculación se produjo mediante acto administrativo amparado por la presunción de legalidad prevista en el artículo 88 del CPACA y sustentado en motivos objetivos. En ese sentido, la jurisprudencia de la SL10507-2014 ha precisado que, frente a un despido motivado aceptado por las partes, no se configura un derecho cierto e indiscutible a indemnización o reintegro, lo que permite la discusión y eventual conciliación de los derechos en controversia. Por tanto, aunque el asunto tenga connotación laboral, no se trata de derechos ciertos e indiscutibles, sino de pretensiones sujetas a debate jurídico.</p> <p>CADUCIDAD DE LA ACCIÓN:</p> <p>Hay una inconsistencia aritmética en la línea de tiempo que, sin corregir, cambia completamente la conclusión. El término de caducidad para el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, conforme al artículo 164 del CPACA, se cuenta así:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fecha de notificación del acto: 21 de noviembre de 2025 • Inicio del término: 22 de noviembre de 2025 • Cuatro meses de caducidad: vencen el 22 de marzo de 2026 <p>Ahora bien, el 22 de marzo de 2026 no es 2025 (error material evidente), y además, como ese día corresponde a domingo, el vencimiento se traslada al siguiente día hábil conforme al artículo 118</p>
--	---

	<p>del CGP, es decir, al 24 de marzo de 2026.</p> <p>Bajo ese ajuste correcto, la solicitud de conciliación radicada el 24 de marzo de 2026 sí se entiende presentada dentro del último día hábil del término, por lo que no habría operado la caducidad en ese mismo momento, al haber sido radicada dentro del plazo prorrogado por regla de inhábiles.</p> <p>PONDERACIÓN DE LA SITUACIÓN PROCESAL:</p> <p>La convocante alega que su desvinculación laboral fue un despido injustificado y discriminatorio por su condición de madre lactante, solicitando indemnización. Sin embargo, la Secretaría Distrital de Gobierno sostiene que la salida del cargo obedeció a la provisión mediante concurso de méritos, decisión contenida en acto administrativo que goza de presunción de legalidad (art. 88 CPACA), sin evidencias de discriminación.</p> <p>Asimismo, el presunto incumplimiento del fallo de tutela no tiene sustento, pues el Juzgado 24 Civil del Circuito de Bogotá, en auto del 27 de marzo de 2026, declaró cumplido el fallo de tutela y descartó la existencia de desacato, lo que configura carencia actual de objeto frente a esa pretensión.</p> <p>En cuanto a la prueba, los documentos aportados no desvirtúan la legalidad del acto administrativo ni acreditan un despido discriminatorio, ya que la desvinculación se soporta en la designación de un ganador de concurso de méritos. Por tanto, no se cumplen los requisitos probatorios para acceder a las pretensiones ni para cuestionar la validez del acto administrativo.</p> <p>ANTECEDENTES DOCTRINALES Y JURISPRUDENCIALES:</p> <p>La doctrina y la jurisprudencia constitucional coinciden en que los cargos en provisionalidad no generan estabilidad laboral absoluta ni un derecho indefinido a permanecer en el empleo público. Su naturaleza es excepcional y temporal, por lo que la permanencia del servidor está condicionada a la provisión del cargo mediante concurso de méritos.</p> <p>En ese sentido, la Corte Constitucional ha reiterado (SU-446 de 2011, T-464 de 2019 y T-421 de 2024) que la desvinculación de un funcionario provisional con ocasión del nombramiento de quien superó el concurso de méritos es constitucionalmente válida, incluso cuando se trata de sujetos de especial protección, pues el principio del mérito prevalece en el acceso al empleo público.</p> <p>Por tanto, la terminación del vínculo provisional no constituye por sí misma un despido injustificado ni vulnera derechos fundamentales, ya que la estabilidad de estos servidores es relativa y cede frente al mejor derecho del ganador del concurso.</p>
--	--

	<p>RECOMENDACIÓN: Frente a la postura de no presentar formula conciliatoria no se realiza ninguna observación.</p> <p><u>FICHA TECNICA DE CONCILIACIÓN: 1841</u></p> <p>Responsable de la ficha: CAMILO ANDRES ESPITIA SANDOVAL Numero de proceso: E- 2026-00002 Tipo de proceso: CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL Demandante: 1. CONSORCIO DISEÑOS SANTA FE 2. CONSORCIO INTERVENTORES MALLA VIAL JCT 2022</p> <p>Demandado: 1. SECRETARÍA DE GOBIERNO 2. SECRETARÍA DE GOBIERNO ALC.LOCAL-SANTAFÉ (SOLO REPRESENTA)</p> <p>Despacho: PROCURADURÍA 44 - JUDICIAL II PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS</p> <p>PROBLEMA JURIDICO: ¿es procedente el cobro de la cláusula penal y liberación de gastos no ejecutados en el marco del CONTRATO DE CONSULTORÍA No. FDLSF-CON-242-2022 y del CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. FDLSF-CIN-297-2022 por el incumplimiento de las prestaciones a cargo del CONSORCIO DISEÑOS SANTA FE y del CONSORCIO INTERVENTORES MALLA VIAL?</p> <p>PRETENSIONES DE LA DEMANDA: En sede administrativa, con intervención de la Procuraduría General de la Nación, se solicita que el CONSORCIO DISEÑOS SANTA FE reconozca y pague la cláusula penal pecuniaria por \$82.215.720 por el presunto incumplimiento del Contrato de Consultoría No. FDLSF-CON-242-2022, así como la liberación del saldo no ejecutado por \$22.609.322,42 y la liquidación de mutuo acuerdo de dicho contrato. De igual forma, frente al CONSORCIO INTERVENTORES MALLA VIAL JCT 2022, se pide el reconocimiento y pago de la cláusula penal por \$11.561.773 por el supuesto incumplimiento del Contrato de Interventoría No. FDLSF-CIN-297-2022, la liberación del saldo no ejecutado por \$26.303.032,36 y la liquidación de mutuo acuerdo del respectivo contrato.</p> <p>Que el contratista CONSORCIO DISEÑOS SANTA FE, reconozca</p>
--	---

	<p>y pague la cláusula penal pecuniaria a título de tasación anticipada de perjuicios en la suma de \$ 82.215.720, a favor del FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SANTA FE</p> <p>Que se ACUERDE la liberación del saldo sin ejecutar del rubro presupuestal, por un valor de (\$22.609.322,42), correspondientes al último pago del CONTRATO DE CONSULTORÍA No. FDLSF-CON-242-2022, esto, debido a la no entrega de los documentos ajustados definitivos para el recibo de los productos.</p> <p>Que se LIQUIDE DE MUTUO ACUERDO EL CONTRATO DE CONSULTORÍA No. FDLSF-CON-242-2022 suscrito entre Fondo de Desarrollo Local de Santa Fe y el contratista CONSORCIO DISEÑOS SANTA FE, Nit No.: 901.626.344-4, de conformidad con los valores expuestos previamente.</p> <p>Que el contratista CONSORCIO INTERVENTORES MALLA VIAL JCT 2022, reconozca y pague la cláusula penal pecuniaria a título de tasación anticipada de perjuicios la suma de (\$ 11.561.773 M/CTE) en favor del FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SANTA FE, CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. FDLSF-CIN-297-2022.</p> <p>Que se ACUERDE la liberación del saldo sin ejecutar del rubro presupuestal, por un valor de (\$26.303.032,36), correspondientes al último pago del CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. FDLSF-CIN-297-2022, esto, debido a la no entrega de los documentos ajustados definitivos para el recibo de los productos</p> <p>Que se LIQUIDE DE MUTUO ACUERDO EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. FDLSF-CIN-297-2022 suscrito entre Fondo de Desarrollo Local de Santa Fe y el contratista CONSORCIO INTERVENTORES MALLA VIAL JCT 2022, de conformidad con los valores expuestos previamente</p> <p>DESCRIPCIÓN CLARA DE LOS PERJUICIOS: NOVENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL PESOS (\$93.777.493).</p> <p>RELACIÓN CLARA DE LOS HECHOS:</p> <p>El Contrato de Consultoría No. FDLSF-CON-242-2022 se originó tras un proceso de concurso de méritos en 2022, mediante el cual se adjudicó al CONSORCIO DISEÑOS SANTA FE la elaboración de estudios y diseños para la malla vial y puentes en la localidad de Santa Fe, por un valor de \$411.078.598 y un plazo inicial de cinco meses</p>
--	--

		<p>desde su acta de inicio en diciembre de 2022. El contrato contempló pagos parciales hasta el 95%, garantías de cumplimiento y calidad, y una cláusula penal del 20% por incumplimiento; sin embargo, fue objeto de múltiples suspensiones en 2023, lo que extendió su ejecución. A pesar de haberse pagado el 95% del valor contractual, quedó un saldo del 5% pendiente y, al vencerse el plazo en noviembre de 2023, no se habría cumplido a satisfacción ni se realizó su liquidación dentro de los términos pactados. Paralelamente, el Contrato de Interventoría No. FDLSF-CIN-297-2022, asociado al anterior, fue también adjudicado y suscrito en 2022 por el CONSORCIO INTERVENTORES MALLA VIAL JCT 2022, con un valor de \$115.617.725, cumpliendo funciones de control técnico, administrativo y financiero. Este contrato igualmente presentó suspensiones y ampliaciones durante 2023, reiniciándose en noviembre de ese año, sin que se evidencie la completa actualización de soportes o garantías, reflejando un desarrollo contractual prolongado y con posibles inconsistencias en su ejecución y cierre.</p> <p>ANÁLISIS Y CONCEPTO PARA CONCILIAR:</p> <p>La conciliación es un mecanismo alternativo de solución de conflictos en el que las partes, con la ayuda de un conciliador neutral, buscan resolver sus diferencias, generando acuerdos obligatorios y con efectos definitivos. En materia contencioso-administrativa, este mecanismo tiene como finalidad facilitar el acceso a la justicia, promover la convivencia pacífica y proteger el patrimonio público y el interés general, según la Ley 2220 de 2022. Esta norma establece que son conciliables los conflictos que conozca la jurisdicción contencioso-administrativa, salvo prohibición legal, y permite conciliar total o parcialmente, incluso sobre efectos económicos de actos administrativos bajo ciertas condiciones, siempre que no se afecten derechos ciertos e indiscutibles en materia laboral. También define los asuntos no conciliables, como los tributarios, los ejecutivos contractuales o aquellos con caducidad de la acción. La conciliación extrajudicial constituye requisito de procedibilidad para varias acciones judiciales, y el Comité de Conciliación debe evaluar cada caso, fijar la posición institucional, determinar la procedencia de acuerdos o llamamientos en garantía y orientar la estrategia jurídica de defensa conforme a la ley y la jurisprudencia.</p> <p>CADUCIDAD DE LA ACCIÓN:</p> <p>No ha operado el fenómeno de caducidad.</p> <p>ANTECEDENTES DOCTRINALES Y JURISPRUDENCIALES:</p>
--	--	---

	<p>La jurisprudencia ha reconocido que entre contratos puede existir una relación de interdependencia o coligación negocial, la cual puede ser expresa o derivarse de la finalidad común que persiguen las partes. El Consejo de Estado ha señalado que dicha coligación se presenta cuando dos contratos, aunque autónomos, están vinculados funcionalmente para la realización de un mismo objetivo económico o práctico, lo que implica que sus efectos deben interpretarse de manera coordinada según la intención de las partes y la función del negocio. En el caso analizado, aunque no existe una dependencia expresa entre el contrato de consultoría No. FDLSF-CON-242-2022 y el contrato de interventoría No. FDLSF-CIN-297-2022, sí se configura una coligación funcional, ya que el interventor tenía la obligación de supervisar integralmente la ejecución del contrato de diseños, revisando documentación técnica, normativa y contractual, emitiendo observaciones y solicitando aclaraciones cuando fuera necesario, lo que evidencia la existencia de una unidad de propósito entre ambos contratos.</p> <p>RECOMENDACIÓN:</p> <p>Frente a la recomendación no se tiene ninguna observación.</p> <p><u>FICHA TECNICA DE PACTO DE CUMPLIMIENTO: 374</u></p> <p>Responsable de la ficha: CARLOS ANDRES NIÑO SOCHA Numero de proceso: E- 2024-00308 Tipo de proceso: PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS Demandante: 1. RODRIGUEZ URA IVAN DANIEL</p> <p>Demandado: 1. PERSONERÍA DE BOGOTÁ 2. SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL 3. INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES 4. SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. 5. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO 6. SECRETARÍA DE GOBIERNO 7. SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD</p> <p>Despacho: PROCURADURÍA 44 - JUDICIAL II PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS</p> <p>PROBLEMA JURIDICO:</p> <p>El problema jurídico consiste en determinar, con base en las pruebas del proceso y las actuaciones de las entidades del nivel central</p>
--	--

		<p>involucradas, si es posible estructurar un acuerdo o pacto dentro de la acción popular que permita superar la problemática planteada. En particular, se analiza el cumplimiento de los requerimientos realizados en las audiencias de pacto, incluyendo la del 14 de noviembre de 2024 y la del 14 de abril del presente año, en la que el IPES propuso adelantar la caracterización de vendedores informales, gestionar solicitudes ciudadanas, verificar requisitos y evaluar autorizaciones conforme al Decreto 670 de 2025. Todo ello con el fin de establecer si, en el marco de las competencias de las entidades demandadas, incluida la Secretaría Distrital de Salud, es viable formular una solución concertada al conflicto.</p> <p>PRETENSIONES DE LA DEMANDA:</p> <p>La parte accionante solicita que las autoridades competentes intervengan de manera coordinada para la protección, recuperación y control del espacio público en varios puntos del sector comprendido entre la calle 94 a 97 con carrera 23 y la Autopista Norte en Bogotá, incluyendo zonas aledañas a entidades como la Clínica Los Nogales y Compensar EPS. En concreto, pide que las alcaldías locales, el DADEP, la Secretaría Distrital de Movilidad, la Secretaría Distrital de Salud y la Policía Nacional adopten medidas para controlar la ocupación indebida del espacio público, realizar operativos de ordenamiento y reubicación de vendedores informales, identificar zonas de reasentamiento, ejercer funciones de vigilancia y administración del espacio público, imponer comparendos por infracciones y ejecutar acciones de restitución del espacio usurpado, con el fin de garantizar su uso adecuado y proteger los derechos colectivos invocados en la acción popular.</p> <p>DESCRIPCIÓN CLARA DE LOS PERJUICIOS:</p> <p>Los perjuicios consisten en la presunta vulneración de los derechos e intereses colectivos relacionados con la indebida ocupación e invasión del espacio público, a la seguridad y salubridad pública, el derecho al goce de un ambiente sano. popular.</p> <p>RELACIÓN CLARA DE LOS HECHOS:</p> <p>La demanda de acción popular se fundamenta en la presunta ocupación indebida del espacio público en el sector de la calle 95 con carrera 23 y zonas aledañas en Bogotá, donde vendedores informales y parqueo no autorizado generan afectaciones como contaminación, riesgo sanitario, obstrucción del tránsito peatonal y vehicular, e impactos en la atención de emergencias, especialmente en cercanías a la Clínica Los Nogales. El accionante sostiene que las entidades competentes no han adoptado medidas efectivas de control ni</p>
--	--	---

	<p>reubicación, pese a las solicitudes elevadas y a una audiencia de pacto inicialmente fallida en marzo de 2025.</p> <p>En el trámite judicial se han realizado múltiples actuaciones de verificación y caracterización de vendedores informales por parte del IPES, incluyendo jornadas en marzo, abril y septiembre de 2025, con identificación progresiva de personas en la zona, lo que llevó a su vinculación al proceso. El despacho judicial ha requerido reiteradamente información y ha ampliado el universo de vinculados con base en los reportes del IPES. Aunque en audiencia del 14 de abril de 2026 el IPES presentó una propuesta de pacto enfocada en la caracterización, gestión de solicitudes y aplicación de protocolos de atención a vendedores informales, el despacho consideró necesario que las entidades del nivel central coordinen una fórmula integral de solución, por lo que ordenó la reunión de comités interinstitucionales y programó la continuación de la audiencia para el 9 de junio de 2026.</p> <p>ANÁLISIS PROCEDENCIA DEL PACTO:</p> <p>Conforme a lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 472 de 1998, es la oportunidad de llegar a un acuerdo entre el actor popular y la parte accionada, en la cual se busca que a través de una fórmula propuesta por iniciativas de alguna de ellas y aprobada por el juez de conocimiento, que permita terminar en forma anticipada el proceso con el fin de mitigar la problemática materia de la acción popular.</p> <p>CADUCIDAD DE LA ACCIÓN:</p> <p>La acción popular podrá promoverse durante el tiempo que subsista la amenaza o peligro del derecho e interés colectivo, se puede concluir que la caducidad de la Acción Popular no ha operado, siguiendo los lineamientos de la sentencia 215 de 1999 proferida por la Corte Constitucional.</p> <p>RECOMENDACIÓN:</p> <p>Conforme a lo expuesto el presente asunto y considerando la propuesta presentada por el IPES en la continuación de la audiencia de pacto realizada el 14 de abril del corriente año y además la insistencia del despacho judicial de instar a las entidades del Distrito del nivel central involucradas en el proceso, de replantear su posición inicial, para llegar a un acuerdo tomando en consideración la propuesta presentada por el IPES a fin de que se ponga fin al conflicto, se propone como anteriormente se dejó planteado, presentar una fórmula de arreglo consistente en que, se brinde la debida colaboración al IPES para que de manera articulada y conjunta, se adelanten y ejecuten la gestiones necesarias, conforme a la competencia de cada una de las entidades del nivel central</p>
--	--

	<p>involucradas en el proceso, con el fin de conjurar la problemática materia de los hechos y pretensiones de la demanda.</p> <p>Frente a la recomendación no se presenta ninguna observación.</p> <p><u>FICHA TECNICA DE ACCIÓN DE REPETICIÓN: 184</u></p> <p>Responsable de la ficha: VICKY ALEXANDRA FERNANDEZ ARANA</p> <p>Numero de proceso: E- 2020-00156</p> <p>Tipo de proceso: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO</p> <p>Demandante: RODRIGUEZ CASTELLANOS FREDDY</p> <p>Demandado: 1. SECRETARÍA DE GOBIERNO (SOLO REPRESENTA)</p> <p>2. SECRETARÍA DE GOBIERNO FDL-SUBA</p> <p>Despacho: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA - SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN F</p> <p>HECHOS:</p> <p>En el proceso radicado No. 11001-33-42-056-2020-00156-01, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en sentencia del 3 de julio de 2024, modificó parcialmente la decisión de primera instancia relacionada con la declaratoria de contrato realidad. En concreto, ordenó que la Secretaría de Gobierno de Bogotá – Fondo de Desarrollo Local de Suba– Alcaldía Local de Suba tome como base el ingreso real del contratista para calcular las cotizaciones al sistema de seguridad social en pensiones, y, en caso de existir diferencias, proceda al pago del porcentaje faltante correspondiente al empleador, mientras que el demandante deberá asumir lo que le corresponda como trabajador, sin lugar a devolución de aportes en salud ni pensión.</p> <p>La decisión se fundamentó en la acreditación de un contrato realidad, al demostrarse los elementos de prestación personal del servicio, subordinación y remuneración, concluyendo que la relación contractual encubría en realidad una relación laboral.</p> <p>Fallo: Mediante la resolución número 674 del 9 de diciembre de 2025 por la cual se ordena el pago de acreencias pensionales en favor del ciudadano Freddy Rodríguez Castellanos de conformidad con lo dispuesto por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca sección segunda - subsección f, en sentencia rad 2020-00156 del 3 de julio de 2024. sipse 150516. En la ficha se indica que el pago fue ejecutado el 30 de diciembre de 2025, observando que se está presentando en tiempos para análisis del Comité.</p>
--	---

		<p>SÍNTESIS CENTRAL MOTIVO DE LA CONDENAS:</p> <p>Teniendo en cuenta la demanda presentada y analizada bajo el radicado 11001-33-42-056-2020-00156-01, se demostró la existencia de un contrato realidad, toda vez que, la parte demandante probó los supuestos de subordinación, prestación personal del servicio y la remuneración con ocasión al mismo.</p> <p>FUNCIONES FUNCIONARIOS EXAMINADOS:</p> <p>Se analiza la existencia de un posible contrato realidad a partir de las funciones y condiciones de ejecución del contrato, incluyendo la supervisión de múltiples contratos. Sin embargo, se concluye que la supervisión ejercida por el Fondo de Desarrollo Local de Suba, a través del Alcalde Local, no constituye subordinación irregular sino el cumplimiento de la cláusula contractual de vigilancia y control prevista en la cláusula décima sexta, la cual se ajusta a lo dispuesto en la Ley 1474 de 2011.</p> <p>ANÁLISIS CONDUCTA FUNCIONARIOS EXAMINADOS:</p> <p>El análisis judicial concluye que, aunque se declaró la existencia de un contrato realidad por la acreditación de subordinación, prestación personal del servicio y remuneración, ello no implica automáticamente responsabilidad subjetiva de los exalcaldes locales. Se determinó que el demandante, como operario de maquinaria, carecía de autonomía y estaba sujeto a órdenes, horarios, supervisión constante y control directo de la entidad, lo que desnaturalizó los contratos de prestación de servicios. Sin embargo, estas condiciones se originaron en la ejecución normal de las funciones de supervisión contractual previstas en la ley y en los contratos, particularmente bajo la Ley 1474 de 2011, sin que ello constituya conducta irregular o culposa de los funcionarios.</p> <p>El juez precisó que la supervisión, la coordinación operativa y el cumplimiento de horarios no configuran por sí solos subordinación laboral ni responsabilidad personal del supervisor. Por ello, aunque se reconoce la relación laboral por primacía de la realidad, no se evidencia dolo o culpa grave atribuible a los exalcaldes dentro del marco de la acción de repetición.</p> <p>RECOMENDACIÓN:</p> <p>En virtud de lo expuesto, se recomienda a los miembros del Comité de Conciliación NO iniciar acción de repetición en contra de los exalcaldes Locales de Suba, toda vez que no se encuentran acreditados los presupuestos subjetivos exigidos de dolo o culpa grave para</p>
--	--	--

		<p>comprometer la responsabilidad personal de los exfuncionarios.</p> <p>Frente a la postura de no iniciar acción de repetición no se realiza ninguna observación.</p>
--	--	--

EVIDENCIAS

Fichas SIPROJ No. 1838, 1839,1840,1841,374,184.

COMPROMISOS: Ninguno

ELABORÓ	PARTICIPANTE
<p>CAMILO ANDRES OLIVELLA VALENCIA OCI</p> <p><i>Camilo Olivella</i></p> <p>REVISÓ</p> <p><i>Olga Milena Corzo Estepa</i></p> <p>OLGA MILENA CORZO ESTEPA JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO</p>	<p>Miembros Comité de Conciliación</p>